

JustyS.

La revista de Justicia
y Seguridad Ciudadana
de EUROsocial II

La violencia
de género en
América Latina
por Laura Chinchilla

p.5



Entrevista a Ana
García de Hernández,
Primera Dama
de Honduras

p.12



Acercando la justicia
a las poblaciones
indígenas

p.14





Sumario

Presentación

- 03 Editorial
- 04 Somos EUROsociAL

Opiniones

- 05 La violencia de género en América latina
por **Laura Chinchilla Miranda**
- 24 Armas de fuego en Latinoamérica
por **Adam Blackwell**

Entrevista

- 12 **Ana García de Hernández**,
Primera Dama de Honduras

Reportajes País

- 07 **Brasil:** Las Casas de Derechos
- 26 **Costa Rica:** Sueños y esperanzas de mujeres
sobrevivientes de violencia

A fondo

- 14 Acercando la justicia a las poblaciones indígenas
- 17 Privados de libertad, no de derechos
- 29 Más derechos para la mujer en América Latina
- 31 Las políticas de seguridad: ¿Elegir entre represión
y prevención? No, cambiar de paradigma

Actores

- 20 Los **Socios** tienen la palabra

Publicaciones

Créditos

Comité Editorial: Unidad Técnica de Justicia y Seguridad Ciudadana, Expertise France - EUROsociAL

Redacción: Expertise France, con la colaboración de países participantes al Programa EUROsociAL II: Costa Rica (Poder Judicial y Da Laura Chinchilla) – Brasil (Ministerio de Justicia) – Honduras (Poder Judicial y Presidencia de la República) – Organización de los Estados Americanos (OEA); y los Socios operativos de las áreas de Justicia y Seguridad Ciudadana: IDLO (Organización internacional); JCI (Francia), FAE (España), COMJIB (Organización internacional), EFUS (Organización internacional), OIJJ (Organización internacional)

Corrección y estilo: Ronald Vivas

Agradecimientos: Beatriz Aguirre Noceda

Maquetación y diseño gráfico:

Metropolitan influence

Impresión: Cyan, Proyectos Editoriales S.A.

Edición: Expertise France

73, rue de Vaugirard – 75006 Paris

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

Autorizada su reproducción, siempre que se autorice su fuente

París, octubre del 2015

www.eurosoci-al.eu

info@eurosoci-al.eu



Jolita Butkeviciene
Directora para América Latina
y el Caribe de la Comisión
Europea (DEVCO)

Editorial



Acceso a la Justicia y prevención de la violencia, pilares de una sociedad cohesionada

Como pilares esenciales de cualquier sistema democrático, justicia y seguridad constituyen los ejes fundamentales de la construcción europea así como de la cooperación brindada por la Comisión. Durante mucho tiempo, han sido considerados la base del estado de derecho, relegando a un segundo plano el papel esencial que juegan las políticas de justicia y de seguridad en la reducción de las desigualdades.

Es justamente en esta lógica que apoyamos a América Latina a través del Programa EUROsociAL II. Junto con los países participantes, hemos abordado la Justicia y la Seguridad ciudadana como elementos centrales del pacto social. Hemos tratado de promover, en países con altas tasas de desigualdad y violencia, el ejercicio de los derechos por parte de cualquier individuo y la posibilidad de vivir en una sociedad pacífica, con el convencimiento de que este esfuerzo contribuye directamente al fortalecimiento de los niveles de cohesión social.

A través de EUROsociAL II, hemos enfocado nuestras intervenciones hacia la implementación concreta de las "100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad". En efecto, tanto las políticas de acceso al derecho y a la Justicia, de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como las de prevención de la violencia concurren a un tratamiento más equitativo de los ciudadanos por parte del Estado. Limitar las barreras de acceso a la Justicia para públicos en situación de exclusión o vulnerabilidad y favorecer la aproximación de la Justicia a los ciudadanos y ciudadanas que más la necesitan son avances concretos conseguidos a lo largo de los últimos años.

Particularmente, hemos querido hacer hincapié en los derechos de la mujer, víctima de discriminación y de violencia en todo el mundo, particularmente en América Latina. Así, promover el enfoque de género ha sido una preocupación constante, ya sea a través de la adopción de normas regionales para la investigación de delitos de violencia

contra la mujer, la atención integral a víctimas de violencia de género, o la inserción socio-laboral de mujeres privadas de libertad, consiguiendo así avances importantes para las mujeres del continente.

Es también un orgullo para la Comisión Europea el haber prestado una atención específica a las personas privadas de libertad, una población en situación de gran fragilidad. EUROsociAL II ha favorecido la ejecución de las penas dentro del respeto a los derechos de cada persona y en conformidad con los estándares internacionales. Al incentivar las políticas de inserción socio-laboral, hemos contribuido a proporcionar nuevas perspectivas de reintegración a las personas sentenciadas, contribuyendo a una limitación de las tasas de reincidencia y, consecuentemente, a una mayor seguridad ciudadana y a comunidades más cohesionadas.

La seguridad ha sido otro de nuestros ejes de intervención. En efecto, las sociedades latinoamericanas están entre las más violentas del mundo. Al afectar en primer lugar a las personas que menos recursos tienen, la inseguridad impacta negativamente en la cohesión social y aumenta las desigualdades. Hemos decidido apoyar las políticas de prevención de la violencia que, junto con las políticas represivas, constituyen un elemento esencial en la reducción de la inseguridad en América Latina. A través de intervenciones que favorecieron un enfoque intersectorial entre el nivel nacional y el local, conseguimos fortalecer el enfoque preventivo de las políticas de seguridad ciudadana.

Todos estos resultados y avances quizás no habrían podido alcanzarse sin el apoyo de EUROsociAL. Tampoco sin el compromiso constante de las instituciones latinoamericanas contrapartes y el trabajo determinado de las mujeres y hombres que llevaron a cabo estos procesos de cambio y reforma. Son ellos a quienes debemos felicitar y quienes pueden enorgullecerse de haber contribuido a la reducción de las desigualdades en América Latina.



Somos EUROsociAL



EUROsociAL II, un éxito común

**Sébastien Mosneron
Dupin, Director General
Expertise France**

A lo largo de los últimos años, los países de América Latina han experimentado importantes progresos a nivel económico, político y social que han contribuido a la mejora del nivel de vida de la población. La región continúa siendo, sin embargo, una de las más desiguales del mundo. Con el fin de acompañar a nuestros socios latinoamericanos a materializar proyectos sociales más inclusivos, Expertise France, la agencia pública francesa de referencia en cooperación técnica internacional se ha comprometido en el marco del programa EUROsociAL

junto con varios socios europeos FIIAPP, ILLA y GIZ así como los latinoamericanos APC, ENAP y SICA.

Desde hace casi 5 años, nos ocupamos de la coordinación de las temáticas de Justicia y Seguridad Ciudadana a la vez que ponemos en práctica actividades en el área de políticas sociales. La movilización de una expertise pública de gran calidad y el firme compromiso de nuestro equipo han contribuido a forjar alianzas eficaces con las administraciones latinoamericanas. El intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las administraciones públicas de los dos continentes así como el acompañamiento para emprender reformas y reforzar las instituciones responsables de su puesta en marcha han contribuido de manera importante al logro de los objetivos del programa a nivel operacional.

Estos resultados han sido obtenidos gracias a la determinación y a la movilización del conjunto de actores del programa. La creación

de casas de derechos, la puesta en marcha de protocolos para una atención mejorada a las víctimas de violencia contra las mujeres, la definición de normas de alcance regional para la reinserción socio-laboral de las personas privadas de libertad, la aprobación de leyes para el desarrollo de un sistema público de guarderías así como para la atención e inserción de personas con necesidades especiales son algunos ejemplos de los avances logrados en materia de cohesión social.

Expertise France pretende continuar el diálogo con los países latinoamericanos así como la cooperación en el ámbito de políticas públicas basadas en intereses y valores comunes. Los programas regionales de cooperación de la Unión Europea que trabajan para mejorar la cohesión social, promover un desarrollo sostenible y luchar contra la criminalidad, constituirán el marco principal de nuestro compromiso con el continente.



Justicia y Seguridad Ciudadana, cruciales para la cohesión social

**Inma Zamora
Directora del Programa EUROsociAL II**

Las políticas de Justicia y Seguridad ciudadana son cruciales para la cohesión social porque contribuyen a la igualdad de acceso, favoreciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones y, por tanto, el sentido de pertenencia. Este espíritu subyace al Programa EUROsociAL que, además ha focalizado sus actuaciones hacia la población vulnerable. Los esfuerzos se han concentrado en garantizar o mejorar el acceso a la justicia de estos grupos, en particular de mujeres víctimas de violencia de género, personas privadas de libertad, población indígena, o adolescentes

en conflicto con la ley, que han ocupado gran parte de la actividad.

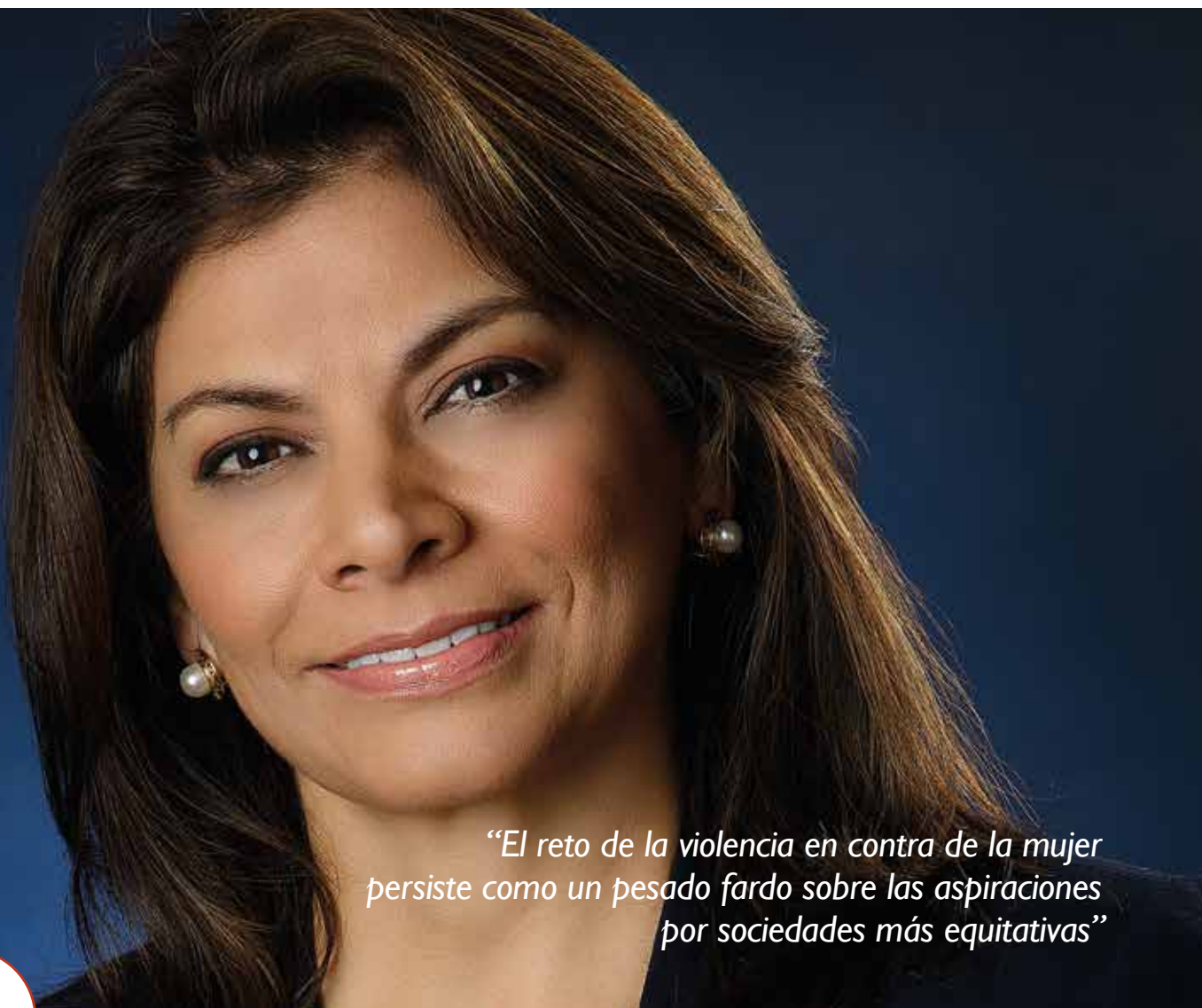
Es por eso que el Programa, además de mantener un alto nivel de diálogo en el que los interlocutores han sido más de 65 Ministros, viceministros y cargos equivalentes, ha conseguido también un impacto efectivo en las vidas de los ciudadanos y ciudadanas. Más de 10.000 personas al año se atienden en la casa de derechos de Cidade de Deus, en Brasil; o 50 mujeres víctimas de violencia son atendidas diariamente en CAPRODEM, en Honduras, centros que han sido apoyados por el Programa EUROsociAL, entre otros.

Debe destacarse además la rica dinámica regional /nacional que se ha favorecido. Apoyando fuertemente el diálogo regional ya existente -o emergente- en torno a algunos desafíos comunes a los países, se han promovido respuestas compartidas, por medio del trabajo con redes institucionales, tanto formales (COMJIB, AIAMPAIDEF, etc.), como informales. Entre ellas las guías para la defensa de personas privadas de libertad, los protocolos de investigación y tratamiento del delito de violencia de género, el marco conceptual y

la plataforma regional MASC, las reglas para la inserción socio-laboral de personas privadas de libertad o el modelo regional para la prevención social de la violencia.

A su vez se ha apoyado a los países a adaptar estos marcos comunes a su propio contexto, situación y prioridades, construyendo e implementando sus propias respuestas nacionales. La aplicación efectiva de los protocolos para el tratamiento integral y la atención a víctimas de violencia de género en Honduras, el protocolo para la Defensa Pública sobre la atención legal dirigida a mujeres extranjeras privadas de libertad en Chile y Perú, la actualización de la estrategia país de seguridad ciudadana en Panamá o el Plan estratégico de MASC en Honduras, Brasil y otros, son algunos ejemplos de esta traducción nacional de marcos regionales comunes.

Es obligatorio felicitar a todos los actores que han hecho posible estos avances que EUROsociAL ha acompañado y destacar los canales de comunicación y coordinación que se han favorecido para ello, entre las distintas instituciones de los sistemas de Justicia: Poder Judicial, Defensorías, Fiscalías y Ministerios.



“El reto de la violencia en contra de la mujer persiste como un pesado fardo sobre las aspiraciones por sociedades más equitativas”



La violencia de género en América Latina

Laura Chinchilla Miranda, Expresidenta de Costa Rica

Este año se ha conmemorado el Vigésimo Aniversario de la Declaración sobre la Plataforma de Acción de Beijing sobre la Mujer, la cual estableció un conjunto de medidas prioritarias que habrían de impulsarse por parte de gobiernos, organismos internacionales y sociedades civiles para hacer valer el efectivo goce de los derechos humanos por parte de la mujer.

Pese a que se reconocen importantes avances en materia de equidad de género en las últimas dos décadas, los mismos no han sido todo lo veloces y efectivos que se esperaba. Particularmente, se reconoce el largo camino que aún se debe recorrer en temas como la discriminación de la mujer en el mercado laboral y la violencia de género.

En América Latina, la agenda por condiciones más equitativas para la mujer ha mostrado avances importantes, especialmente en lo que respecta a su participación en la política y la vida pública, y al acceso a servicios sociales fundamentales como la educación y la salud. En estas áreas varios países de la región, ostentan indicadores superiores a la media de las naciones europeas. Sin embargo, al igual que tiende a ocurrir en la mayor parte de las sociedades, el reto de la violencia en contra de la mujer persiste como un pesado fardo sobre las aspiraciones por sociedades más equitativas.

Es cierto que América Latina ha arrastrado a lo largo de su historia el problema persistente de la violencia. Hoy, como producto de la violencia delincuencia y de la criminalidad organizada, la región es considerada la más violenta del mundo, ostentando las mayores tasas de homicidios a nivel internacional.

En el marco de este complejo cuadro, el problema de la violencia doméstica y de género, adquieren dimensiones dramáticas. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, encuestas efectuadas en nuestros países revelan que entre la cuarta parte y la mitad de las mujeres declaran haber “sufrido alguna vez” violencia de parte de su compañero. Las víctimas de este tipo de violencia pertenecen a todos los estratos sociales y las secuelas que genera en la víctima y en otros miembros del núcleo familiar como los hijos, cuando los hay, son especialmente graves y tienden a perpetuar ciclos reproductivos de patrones de conducta violentos.

Frente a la gravedad del problema, fuertemente enraizado en patrones de conducta influenciados por la cultura y la tradición, y agravados por el consumo de drogas y

“Al menos 10 países de la región han aprobado leyes con un abordaje integral al problema de la violencia de género”

alcohol, debemos reconocer importantes avances desde el punto de vista de las respuestas que se han venido articulando por parte de los Estados y de las sociedades civiles.

De acuerdo a la Cepal, al menos 10 países de la región han aprobado leyes con un abordaje integral al problema de la violencia de género. En la gran mayoría de ellos se cuenta con normas e instituciones que procuran brindar protección a la víctima, y en varios se han promovido medidas de naturaleza punitiva que han buscado incorporar nuevos tipos penales como el femicidio.

Se reconoce que los logros más notables en esta materia, han tenido lugar dentro de la Administración de Justicia, particularmente en el plano normativo. Sin embargo, muchos de esos avances normativos están aún a la espera de ser complementados con planes y programas en materia de capacitación judicial, de monitoreo y evaluación, y de recursos financieros que los sustenten.

Finalmente, para que los esfuerzos dirigidos a revertir la violencia en contra de la mujer puedan resultar sostenibles en el tiempo, las acciones de tipo punitivo y judicial, deben ser complementados con medidas más efectivas en los ámbitos preventivos, de reparación de víctimas y de tratamiento de

“Debemos seguir promoviendo una vigorosa agenda para la contención y disminución de la violencia en contra de la mujer”

los agresores. Existen ejemplos que confirman que cuando el problema se enfrenta desde una visión integral, se alcanzan resultados exitosos. Tal es el caso de Costa Rica, adonde gracias a la intervención concertada de diversas instituciones las tasas de femicidio experimentaron una drástica caída cercana a un 70%, en apenas tres años.

Siendo la violencia uno de los problemas endémicos que aqueja a América Latina, debemos seguir promoviendo una vigorosa agenda para su contención y disminución. El efectivo combate de la violencia en contra de la mujer es un paso indispensable para revertir los factores de tipo sociocultural que están a la base de las conductas violentas en la región. Es por ello, que debemos hacer de esta causa, una de las que más anime las agendas judiciales y sociales de nuestras naciones.



Brasil: Casas de Derechos

Secretaria de Reforma de la Justicia – Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil

Durante los últimos 15 años, Brasil ha experimentado un crecimiento masivo del poder socioeconómico de su población. Gracias a este crecimiento, solo en la última década, más de 30 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Por primera vez, las políticas para combatir el hambre y la pobreza han conseguido sacar al país del mapa del hambre de la ONU. Además, las tasas de acceso a la enseñanza técnica y superior se han duplicado.

Este crecimiento socioeconómico de gran parte de la población también ha provocado la aparición de nuevas demandas y desafíos a los que tienen que responder tanto la sociedad como el Estado brasileño. Han surgido nuevas necesidades y el número de ciudadanos dispuestos a participar ha aumentado, lo que ha generado un aumento de la demanda para mejorar el acceso a la

justicia, a los derechos y a la participación social. El programa Casa de Derechos se ha desarrollado en esta coyuntura de inversiones para mejorar el acceso a la justicia y la aproximación del poder público estatal a la población en situación de vulnerabilidad.

Las Casas de Derechos son establecimientos públicos donde se concentran servicios de acceso a la justicia y a la ciudadanía. Cada casa permite el acceso a instituciones gubernamentales y a los organismos de justicia en esos territorios, lo que incluye también servicios de naturaleza judicial y extrajudicial, constituyendo estos últimos

una gran ventaja. Su presencia en el territorio es fundamental para poder acercar las instituciones estatales a la población.

Este programa se centra en el concepto de acceso a la justicia adoptado por la Secretaría de Reforma de la Justicia (SRJ) del Ministerio de Justicia, concebido como algo más amplio de lo que se había venido utilizando hasta el momento y diferente del acceso al Poder judicial. Este último está considerado como una de las formas posibles (y de mayor importancia) de acceso a la justicia. Sin embargo, el acceso a la Justicia puede entenderse mejor a través de una

lógica de acceso a los derechos, que puede producirse tanto por vías judiciales como extrajudiciales.

Otra de las grandes diferencias de este programa es la presencia de un núcleo de justicia comunitaria, que, junto con la atención jurídica gratuita, forman el núcleo de servicios esenciales y obligatorios de las Casas de Derechos. El núcleo de justicia comunitaria potencia la participación social en esta política pública, ya que integra a agentes comunitarios que, acompañados de un equipo multidisciplinar, realizan acciones de mediación comunitaria, educación a los derechos y comunicaciones en las redes sociales.

El público objetivo de la política pública de las Casas de Derechos es la población en situación de vulnerabilidad que, por motivos de edad, sexo, estado físico o mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentra dificultades a la hora de ejercer plenamente los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico del sistema judicial. Las directrices nacionales del programa Casas de Derechos están definidas en el Decreto Ministerial n.º 1.267, del 29 de julio de 2014, del Ministerio de Justicia.

El programa obtuvo el apoyo internacional por medio de EUROsociAL. Durante el año 2013, la cooperación con EUROsociAL favoreció el desarrollo del proyecto piloto en la ciudad de Rio de Janeiro. Tras la inauguración de la Casa de Derechos en Cidade de Deus (Rio de Janeiro-RJ), y gracias a la cooperación entre la Secretaría de Reforma de la Justicia y EUROsociAL, se elaboró un manual para las Casas de Derechos, que contenía instrucciones para su implementación y funcionamiento. Este manual representa también una consolidación del modelo de intervención territorial adoptado por la Casa de Derechos.

A finales del año 2014, en su reunión regional de clausura y en presencia de ocho países de la región además de un equipo de EUROsociAL, las Casas de Derechos fueron destacadas como proyecto base para la elaboración de un modelo de oferta de acceso a derechos en América Latina, dada su flexibilidad en términos de servicios y su capacidad de adaptación a las necesidades de las comunidades. A lo largo del año 2015 esta cooperación ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de un proyecto de sostenibilidad de las Casas de Derechos con el propósito de buscar alternativas para su financiación y optimizar los recursos invertidos.



La cooperación con EUROsociAL sigue la línea de actuación existente entre la SRJ y el programa europeo fomentando el desarrollo, no solo de las Casas de Derecho, sino también de las capacidades de lucha contra el racismo en los núcleos de Justicia Comunitaria y en las oficinas para la mejora de la política, desarrollando núcleos en todo Brasil. Dado que estas dos políticas están relacionadas, la consolidación del programa Justicia Comunitaria resulta fundamental para que las Casas de Derechos constituyan una política pública de acceso a la justicia sólida.

Tal y como lo mencionamos, el núcleo de justicia comunitaria es de vital importancia para el buen funcionamiento de las Casas

de Derechos, al suponer una gran ventaja en relación con las demás políticas públicas que utilizan el concepto de entrada única (ventanilla única). Además de su actuación tradicional (mediación comunitaria, articulación de las redes locales y educación a los derechos), el programa es responsable de aproximar la comunidad a las instituciones y a los servicios que allí se ofrecen, así como de ofrecer un diagnóstico más preciso de las necesidades de dicha comunidad.

La flexibilidad de esta política es también un aspecto fundamental para un país tan diverso como Brasil. Desarrollar políticas públicas capaces de adaptarse a las condiciones estructurales de cada institución y



también a las necesidades de cada comunidad, resulta crucial para lograr su expansión a nivel nacional. Además, gracias a la presencia constante de la comunidad junto con las estructuras presentes en la región, es posible establecer un diagnóstico permanente de las necesidades de dicha región, haciendo que la política pública sea mucho más precisa y cuente con participación social.

Las Casas de Derechos constituyen además un importante instrumento de prevención de la violencia. La posibilidad de resolver numerosos problemas y conflictos dentro de las comunidades de la región en cuestión ayuda a fomentar la paz de forma inclusiva. Además, permite la utilización del espacio físico por parte del poder público. En las dos experiencias desarrolladas en Brasil hasta el momento, la revitalización de áreas otrora abandonadas y controladas por el crimen, y la prestación de servicios públicos en la zona han tenido un impacto inmediato en los barrios de Cidade de Deus, Rio de Janeiro (RJ) y de Jacintinho, en Maceió (Alagoas-AL).

Para los próximos años ya se están desarrollando varios proyectos. Además del ya mencionado (y fundamental) modelo de sostenibilidad de las Casas de Derechos, conjuntamente con EUROsociAL, la SRJ del Ministerio de Justicia está desarrollando un sistema de asistencia e indicadores (software) para los núcleos de Justicia Comunitaria y las Casas de Derechos, en coo-

peración con la Universidad de Brasília. Este sistema mejorará el funcionamiento de las Casas, además de permitir un registro de datos más preciso y la elaboración de distintos indicadores sobre estos programas.

Gracias a su carácter flexible y participativo, el modelo creado en asociación con EUROsociAL es fácilmente ampliable a otros territorios brasileños. El desafío es ahora la consolidación del Programa Casas de Derechos a través de una política nacional de acceso a la justicia, con la implantación de al menos una Casa en cada capital estadual de Brasil. En este sentido, los avances técnicos que se están desarrollando junto con EUROsociAL añadirán un valor incalculable a la política.

Las Casas de Derecho son, por tanto, un órgano fundamental para mejorar el acceso a la justicia en nuestro país, no solo por la presencia física y permanente de servicios judiciales y extrajudiciales en comunidades en situación de vulnerabilidad, sino, principalmente por estar configuradas como un espacio completo de atención a estas poblaciones. Además, la presencia de los servicios de Justicia Comunitaria en las Casas de Derechos ha revelado que las políticas diseñadas e implementadas con una participación social activa tienen un éxito cada vez mayor.

La Secretaría de Reforma de la Justicia tiene como función garantizar el ejercicio

pleno de los derechos de la ciudadanía, especialmente a aquellas personas que, por motivos diversos (sociales, económicos, raciales) o por falta de reconocimiento por parte del estado, han sido despojadas de sus derechos. Las Casas de Derechos formarán estructuras públicas capaces de incitar a esa población a construir y escoger su camino para ejercer la justicia de forma democrática, pacífica y solidaria.





Justicia y Seguridad



Ciudadana en cifras

Instituciones participantes

714 | 611 de América Latina
103 de la Unión Europea

 **502** en Justicia

 **212** en Seguridad Ciudadana

Personas participantes

4 838

4 471
Participantes América latina

 **2 511**
 **1 960**

367
Participantes de Europa

 **169**
 **198**

Expertos

598 |  **286**  **312**

283 Expertos Europeos **315** Expertos Latinoamericanos

Publicaciones

 **55** documentos publicados de los cuales

 **32** documentos de política



Entrevista

Ana García de Hernández, Primera Dama de Honduras

¿Cómo considera la situación actual de las mujeres en Honduras y, sobre todo, de las mujeres víctimas de violencia?

A.G.H.: En nuestro país, la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema altamente sensible. Como gobierno, hemos realizado acciones concretas tendientes a disminuir la incidencia de esta forma particular de violencia mediante la implementación de proyectos focalizados especialmente en aquellos lugares identificados como altamente vulnerables, permeando además espacios como los medios de comunicación

relativos a la necesidad de la prevención de la violencia contra las mujeres.

Nuestro despacho ha liderado campañas como la denominada "NO ES NO", la cual combate el acoso sexual laboral y que ha tenido un fuerte impacto en los espacios profesionales al sensibilizar sobre la cero tolerancia a esta forma de violencia contra las mujeres. A esta campaña se ha sumado además la empresa privada y esperamos que sea adoptada como una política permanente de todo el sector laboral con el fin de llegar a erradicar estas prácticas culturales que violentan los derechos humanos de las mujeres.

Por otra parte, se sabe que la primera causa de denuncias ante la Policía Nacional sigue siendo la violencia doméstica en casos que no son categorizados como delitos y en los casos penales la violencia intrafamiliar sigue siendo quien ocupa el primer lugar. Por esta razón se llevan a cabo procesos orientados a mejorar la respuesta institucional desde diversos sectores, esencialmente el sector justicia. Para esto, ha sido clave la apertura y funcionamiento del CAPRODEM, el Centro de atención y protección de los Derechos de las Mujeres, que busca centralizar los procesos y poner a disposición de las mujeres los recursos humanos prácticos para

poder salir de situaciones de violencia, evitando la revictimización.

Además, y de forma simultánea, se llevan a cabo procesos de fortalecimiento a operadores de justicia y redes de mujeres, así como de prevención de violencia a través del Instituto Nacional de la Mujer y la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad. Un ejemplo de ello es el proyecto B.A. I de Prevención de violencia contra las mujeres, trata de personas y feminicidios, el cual es financiado con fondos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y que focaliza sus acciones en diez municipios del país como son: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Tela La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, Ocotepeque y Trojes.

¿Cuáles son las prioridades del gobierno hondureño en este ámbito?

A.G.H.: En Honduras, como en el resto de los países centroamericanos y especialmente en los del Triángulo Norte, se han priorizado los temas de Violencia doméstica e intrafamiliar; violencia sexual, trata de personas y feminicidios. Estos temas se atienden desde diversos sectores, justicia, seguridad, salud y otros. Entre las acciones realizadas se destacan:

- Prevención de la violencia doméstica contra las mujeres;
- Prevención de la violencia en el noviazgo en jóvenes;
- Prevención de violencia en escuelas y colegios (Bullying);
- Fortalecimiento de la policía y las unidades de género para la atención a las mujeres víctimas de la violencia;
- Fortalecimiento de los planes municipales de seguridad para la prevención de la violencia contra la mujer;
- Creación de microempresas y autoempleo/cooperativismo para mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia (Prevención de violencia patrimonial);
- Prevención de feminicidios;
- Prevención de la violencia sexual contra la mujer.

Las prioridades anteriores han sido establecidas de acuerdo a una estrategia de prevención primaria, secundaria y terciaria diseñada bajo un enfoque orientado para el trabajo con niños y niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, así como desde una perspectiva a nivel nacional y local.

Así mismo, se ha trabajado satisfactoriamente en:

- La implementación de los Observatorios de Violencia con el propósito de tener información para la intervención oportuna para la disminución de la problemática;
- Incorporar a las mujeres víctimas de violencia a la oferta institucional del gobierno en el programa de Vida Mejor; priorizando los municipios más violentos;
- La estrategia de implementación del protocolo de atención a violencia doméstica e intrafamiliar en las tres ciudades con mayor incidencia de violencia contra la mujer: Implementación el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer.

¿Considera el Centro de Atención y Protección de los Derechos de la Mujer (CAPRODEM) como un modelo exitoso a promover? ¿Por qué? ¿Contempla el Gobierno de Honduras su posible réplica en otras ciudades del país?

A.G.H.: CAPRODEM ha demostrado ser una alternativa importante para la protección de los derechos de la mujer. Una de nuestras propuestas es integrar el modelo de CAPRODEM, en lo que se refiere a la parte de justicia, a un proyecto que estamos gestionando desde el Gobierno que es la apertura de centros como Ciudad Mujer (en El Salvador) donde además de la atención a las víctimas de violencia se integran respuestas a formación laboral, capacitación, acceso a financiamientos, salud, y otros que permitan alinear la oferta social del Estado para dar una respuesta integral a las mujeres víctimas de violencia.

EUROsocioAL ha apoyado procesos de desarrollo de mecanismos alternativos de solución de conflictos hacia poblaciones afrodescendientes: ¿Cómo considera que esta política acerca la justicia de las poblaciones que más dificultad tienen para acceder a ella?

A.G.H.: Indudablemente, los mecanismos alternativos son una excelente herramienta social para la resolución pacífica de conflictos que permite la descongestión de la carga procesal en los diferentes juzgados y tribunales. Los procedimientos arbitrales y demás instrumentos de construcción de culturas de paz social y de sana convivencia son necesarios, especialmente en aquellos

lugares que por su geografía no favorecen la impartición de justicia desde los dispositivos establecidos por el Estado.

No obstante, debe quedar claro en cada espacio de fomento a la resolución de conflictos que la violencia contra las mujeres no admite conciliación y que cuando la vida de las mujeres está en peligro, el mensaje social debe ser aquel que refrende la idea de la no tolerancia a la violencia contra las mujeres, por lo que debemos seguir fortaleciendo las iniciativas de resolución de conflictos pero estableciendo las limitaciones claras de cuáles son los asuntos conciliables y cuáles deben ser referidos a instancias de carácter no civil.

¿Cómo valora el trabajo realizado con el apoyo del programa EUROsocioAL en Honduras en temas de justicia, en particular en materia de mujeres víctimas de violencia y de mecanismos alternativos de solución de conflictos? Según su experiencia, ¿qué lo diferencia de otros programas de cooperación?

A.G.H.: EUROsocioAL ha sido desde hace algunos años un colaborador esencial en el desarrollo de iniciativas encaminadas de manera especial al combate y erradicación de la violencia contra las mujeres. Su diferencia clave en relación a otros socios de la cooperación radica en que uno de los ejes principales ha sido la generación de productos como protocolos y fortalecimiento técnico institucional debido a la necesidad de reconocer que, justamente, son las personas el fin supremo de la sociedad y del Estado, pero, además, son también el recurso más valioso de las instituciones u organizaciones.

Lo anterior permite la sostenibilidad y seguimiento posterior de las acciones iniciadas mediante intervenciones que pueden ser aseguradas desde los mismos mecanismos nacionales o bien, mediante la sólida colaboración y solidaridad de los mecanismos de cooperación internacional existentes en Honduras.



Acercando la justicia a las poblaciones indígenas

Marc Reina

Técnico de Proyectos de la Unidad Técnica de Justicia y Seguridad Ciudadana. Programa EUROsociAL

En las últimas décadas se ha pasado de la aplicación de políticas asimilacionistas al reconocimiento de los derechos de los indígenas tanto a nivel local, estatal y regional. Aunque aún queda mucho trabajo por realizar, el Convenio No. 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas han impulsado significativamente el reconocimiento de la multicultu-

ralidad y de la necesidad de preservar la distinción indígena como rasgo de identidad nacional.

El reconocimiento de la diversidad cultural contribuye a la mejora de la cohesión social

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos y avances conseguidos en las últimas décadas, las poblaciones indígenas de América Latina siguen siendo una de las comu-

nidades más desfavorecidas en cuanto al acceso a la justicia, respeto a sus derechos, seguridad, políticas sociales de educación, sanidad, entre otras. Estas circunstancias ponen en peligro los avances realizados y la cohesión social no sólo de las comunidades indígenas, sino de toda la sociedad *per se*.

Las últimas estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014) apuntan a que existen entre 30 y 50 millones

de indígenas en América Latina, lo que supone aproximadamente entre un 7 y un 10 por ciento de la población total de la región. Sin embargo, las diferencias entre países son abismales. Mientras que alrededor del 41 por ciento de la población de Guatemala y Bolivia son indígenas, sólo el 0,5 y el 0,2 por ciento de los habitantes en Brasil y El Salvador, respectivamente, son considerados como indígenas.

Si bien el modo de calcular las poblaciones indígenas puede variar sustancialmente de un país a otro, es evidente que estas comunidades representan una minoría desfavorecida y en situación de riesgo, por lo que resulta de vital importancia prestar atención y proveer de servicios y herramientas necesarias para su protección como comunidades distinguidas con tradiciones centenarias.

En este sentido, desde las áreas de justicia y seguridad ciudadana de EUROsociAL se ha venido trabajando en acciones y asistencias técnicas concretas en las líneas de trabajo de reducción de las barreras de acceso a la justicia, promoción y divulgación de derechos y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Cabe destacar los resultados obtenidos a nivel regional gracias al desarrollo del Portal MASC en el que se pueden encontrar las distintas herramientas de mediación, conciliación y arbitraje utilizados por una variedad importante de comunidades indígenas en Centroamérica y Suramérica.

Justicia y violencia como retos primordiales

Debido a distintos factores como el despojo de tierras, la criminalidad y la violencia provocada por actividades ilícitas como el tráfico de drogas o la caza furtiva, la minería legal e ilegal y el agotamiento de los recursos naturales, entre otros, una gran parte de la población indígena de América Latina se ha visto forzada a desplazarse a zonas urbanas. Según el Banco Mundial (2014) el 48 por ciento de la población indígena reside en zonas urbanas, porcentaje que varía mucho entre los países de la región, llegando al 60 por ciento en Chile y Venezuela y quedándose por debajo del 40 en Bolivia, Brasil, Colombia y Nicaragua.

El hecho de que sea en las zonas urbanas donde más servicios básicos se ofrecen, también puede ser un problema en lo relativo a integración social, preservación de

las diferencias culturales y salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas. Con la finalidad de minimizar estos riesgos, EUROsociAL ha trabajado en garantizar el acceso a los derechos y la justicia mediante

Un sistema garantista de acceso a la justicia formal e informal, mejora de la confianza en las instituciones públicas

la protocolarización de actuaciones de entes públicos y la formación de funcionarios y líderes indígenas.

Por otro lado, las altas tasas de criminalidad y violencia que sufren las poblaciones indígenas son debidas en gran parte al narcotráfico, al cultivo y a la minería ilegal. En este sentido, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) en su informe 'Amazonia bajo presión' (2012) estima que alrededor del 17 por ciento de las zonas de protección indígena de Colombia son utilizadas para cultivos ilegales.

lor para el desarrollo de la Guía de Acceso a la Justicia y a los MASC para pueblos y etnias afro-hondureñas y fue un resultado derivado de la asistencia de EUROsociAL en la definición del Plan Nacional de forma-

ción de gestores de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Precisamente, para la prevención y la resolución pacífica de conflictos, en Brasil se adoptaron distintos Manuales de Mediación Comunitaria dentro del marco del Programa Justiça Comunitária desarrollado por el Ministério da Justiça de Brasil y el Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios del Poder Judicial da União.

El esfuerzo realizado por las instituciones gubernamentales latinoamericanas y la sociedad civil, así como los resultados conse-



Esta situación crea tensiones importantes entre y dentro de las propias comunidades indígenas, las empresas explotadoras con permisos legales y las personas cuyas actividades son ilícitas. Para abordar esta problemática, EUROsociAL ha promovido el uso de (los) Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos con un enfoque particular en las poblaciones indígenas, sus tradiciones y costumbres en la resolución de conflictos en el seno de sus comunidades. Por ejemplo, el análisis de las herramientas y metodologías utilizadas por las comunidades indígenas en la mediación de conflictos en Honduras ha sido de gran va-

guidos a lo largo de los cinco años de EUROsociAL, junto a las iniciativas no vinculadas al programa, nos permiten ser optimistas a la hora de medir (la evolución del) el acceso a la justicia de estas comunidades. Sin embargo, es importante no perder la focalización, ya que la violencia, las desigualdades y la falta de acceso a la justicia de la población indígena alcanzan todavía niveles preocupantes.

Perspectivas a largo plazo para las poblaciones indígenas

La defensa del acceso a la justicia y de los derechos y deberes de los pueblos indígenas en la región latinoamericana pasa por la ampliación de las herramientas y las capacidades de estos pueblos para influir en la toma de decisiones y el diseño, implementación y evaluación de programas y políticas públicas acordes con sus necesidades.

Es por ello que la plena participación política de las comunidades indígenas debe ser considerada como el siguiente paso en el acceso a los derechos de estas poblaciones. Esto permitirá fortalecer el estado democrático y sus instituciones públicas, además de mejorar la cohesión social y el enfoque de las políticas públicas sociales y de desarrollo económico adaptadas a cada realidad nacional y local.

En la actualidad, solamente un grupo de países muy reducido ha promulgado legislación nacional que fortalece la participación política de los pueblos indígenas en proce-

que más les conciernen así como en los temas generales nacionales.

En 2011 el gobierno del Perú aprobó la Ley de Consulta Previa la cual obliga al estado y a las compañías de la industria extractiva a consultar a las poblaciones indígenas antes de iniciar trabajos de obtención de recursos naturales en áreas de interés indígena. Aunque la ley no estuvo exenta de controversia, la voluntad de otorgar poder a las comunidades indígenas sobre aquellos asuntos que les afectan, fue un paso muy importante para el estado y para el reconocimiento de los derechos indígenas.

Basados en un enfoque integral y de preservación y promoción de las diferencias culturales y buscando el fortalecimiento y empoderamiento de las poblaciones indígenas en el Perú, EUROsociAL, junto al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, ha apoyado la elaboración e implementación de tres protocolos. En primer lugar, un protocolo de atención y orientación legal que permite la mejora de las condiciones de vida de los distintos pueblos indígenas en el país. En segundo lugar, un protocolo de coordinación interforal enfocado al estable-

“En Lima hay cerca de 15 médicos por cada 10 000 habitantes mientras que en Huánuco, ciudad de mayoría indígena, apenas hay 4”

Ministerio de Salud del Perú (2012)

sos electorales democráticos mediante la creación de circunscripciones electorales particulares, la elección de representantes políticos o la reforma a nivel administrativo y político.

Perú: retos y desafíos particulares

Perú ha ratificado los 9 tratados y pactos internacionales sobre derechos indígenas

El ejecutivo peruano ha sido uno de los actores clave en la promoción, divulgación y aceptación de los derechos de las poblaciones indígenas y de la necesidad de su participación activa tanto en la vida política como en la vida social en aquellos temas

cimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos mediante herramientas de mediación y conciliación comunitaria. Por último, EUROsociAL ha promovido el diseño e implementación del protocolo de actuación jurisdiccional que pone énfasis en garantizar el ejercicio de los derechos de la población indígena.

El trabajo realizado en el Perú ha sido complementado con la capacitación de líderes indígenas y altos funcionarios públicos en el acceso y difusión de los derechos de esta población.

Los retos futuros del Perú vienen de la mano de, por un lado, la mejora de las políticas de acceso a la justicia y de la prevención de la violencia y el conflicto respetando las tradiciones y las lenguas propias reconocidas y, por otro lado, la lucha contra la discriminación y la violencia en las mujeres indígenas, particularmente de aquellas que viven en zonas rurales o marginadas en las grandes ciudades.

En Perú hay

43

pueblos indígenas y 43 lenguas indígenas de uso regional

Entre

4,5 y 9,7

millones de personas indígenas viven en el Perú

Entre el

16 y el 31 %

del total de la población del país

44 %

de la población indígena peruana vive en grandes ciudades

Entre 2004 y 2012 la pobreza extrema de las poblaciones indígenas descendió 20 puntos porcentuales

32 %

de los indígenas vive bajo el umbral de la pobreza

Fuente: Banco Mundial 2014



Privados de libertad, no de derechos

Xavier Cousquer

Coordinador de la Unidad Técnica de Justicia y Seguridad Ciudadana. Programa EUROsociAL

La privación de libertad es conocida en las sociedades democráticas como un castigo, consecuencia de una decisión de justicia, cuyo objetivo primero es proteger a la sociedad de personas que ponen en peligro la seguridad colectiva. Sin embargo, durante muchos años, todavía en numerosos países, la privación de libertad aparece como una solución sencilla a fenómenos complicados; como un proceso que permitiría dar una respuesta definitiva a la violencia o la delincuencia. Esta última visión consiste en negar el carácter altamente humano de los procesos de justicia penal y en quitar a las personas privadas de libertad su estatus de ciudadano, y por tanto, de titular de derechos.

No se trata de cuestionar la pertinencia de medidas privativas de libertad, en muchos casos necesarias, ni de minimizar la grave-

dad de los actos cometidos por las personas detenidas, pero es imprescindible poner de relieve que la privación de libertad no puede conducir a una privación de derechos.

En Latinoamérica, alrededor de 1 000 000 de personas viven a diario en la cárcel. La tasa de encarcelamiento media de la región (175 detenidos por cada 100 000 habitantes) es ligeramente superior a la observada a escala mundial (150 detenidos por cada 100 000 habitantes). A nivel nacional, estas tasas alcanzan más de 250 por cada 100 000 habitantes en Brasil y Uruguay, más de 300 por cada 100 000 habitantes en Chile y El Salvador; y más de 375 por cada 100 000 habitantes en Panamá. En muchos lugares, no paran de crecer desde hace unos treinta años.

¿Las personas privadas de libertad están muy bien donde están?

La dificultad que encuentran los profesionales de la Justicia y del mundo penitenciario al abordar este tema proviene, en gran parte, de la necesidad de remar a contracorriente. Esto es, en pocos países se trata de un tema altamente prioritario y en casi todos los países la opinión pública considera que los privados de libertad están muy bien donde están y no merecen mayor atención. Además, muchos están convencidos de que la privación de libertad tiene un elevado coste para la sociedad y que cualquier proceso de reforma conllevará un aumento sustancial del gasto público. En este contexto, resulta difícil ser ambicioso y desarrollar procesos de reforma de gran amplitud.



Por lo tanto, si bien el tema es políticamente sensible, lo es también desde un punto de vista jurídico. En efecto, asegurar que los derechos de los privados de libertad sean respetados y debidamente ejercidos no constituye un trato de favor sino una obligación del Estado, prevista en las leyes y en diferentes estándares regionales e internacionales. Sin embargo, hoy día, en muchos países esta obligación no es una realidad y, a veces, el único derecho que se les otorga a los privados de libertad es el de permanecer en silencio. No obstante, y gracias a la movilización de varios actores, esta situación está evolucionando de manera positiva.

“La especialización de las Defensorías Públicas en materia de ejecución de la pena constituye un avance muy concreto para el ejercicio de los derechos por parte de los privados de libertad”

El papel fundamental de los defensores

Los abogados en Europa y las Defensorías Públicas en América Latina han jugado, a lo largo de los últimos años, un papel fundamental en esta materia para cambiar prácticas y mentalidades. Son esos esfuerzos que el Programa EUROsociAL ha apoyado en su segunda fase, convirtiéndose así en uno de los primeros programas de cooperación internacional en intervenir directamente en favor de las personas privadas de libertad.

Garantizar el acceso al derecho y a la justicia de los privados de libertad no es tarea fácil. Se necesitan actores, como defensores públicos, especializados y con un conocimiento detallado de la realidad del encarcelamiento y de las necesidades de las personas detenidas, sobre todo cuando se trata de públicos particularmente vulnerables como lo son las mujeres, los niños encarcelados con ellas o los menores de edad. En determinados casos, y debido a la distancia que se impone entre el privado de libertad y su defensor, las visitas físicas son limitadas. Esto reduce la capacidad del defensor de asegurarse del respeto de los derechos del detenido. Además, es esencial una buena articulación de los actores que intervienen en este ámbito y que, a menudo, no tienen las mismas preocupaciones. Este es, sin duda, el aspecto más complicado. A pesar de estas dificultades, los países de América Latina están respondiendo al desafío. La especialización de las Defensorías Públicas en materia de ejecución de la pena,

la sistematización de las visitas, presenciales o a distancia, y la aplicación de manuales para visitas individuales o generales para asegurarse de las condiciones de detención, constituyen avances muy concretos para el ejercicio de los derechos por parte de los privados de libertad.

El derecho a la defensa para los privados y la capacidad de poder ejercerlo tanto como la garantía de que la ejecución de la pena se desarrolle en condiciones acordes con los estándares internacionales son, sin duda, los elementos más básicos y prioritarios. Más allá, hay que seguir trabajando para extender estos derechos. El derecho a la educación, a la formación, al trabajo y a la salud han de ser igualmente garantizados. Esta tarea resulta complicada, al implicar en muchos casos una reorganización del sistema penitenciario o, al menos, una ampliación de los servicios brindados. Sin embargo, todos estos derechos son elementos esenciales para la inserción o reinserción de las personas privadas de libertad y una reintegración lo más satisfactoria posible en la comunidad. No olvidemos que la cárcel es un espacio de desocialización acelerada. Tampoco podemos ignorar que la ausencia de procesos de inserción o reinserción es casi una garantía de reincidencia y, por tanto, la retroalimentación de un círculo vicioso que nace con la comisión de un delito, conduce a la cárcel, y posteriormente a la comisión de otro delito. Es por esto que la garantía de nuevos derechos a los privados de libertad resulta imprescindible para hacer de la ejecución de la pena un momento útil con consecuencias positivas sobre los niveles de seguridad y la cohesión de la sociedad.

“No olvidemos que la cárcel es un espacio de desocialización acelerada”

Terminar con la sistematización de la privación de libertad

El pleno ejercicio de estos derechos es aún más fundamental cuando uno conoce la realidad de la población penitenciaria. La cárcel es seguramente el espacio donde se concentra la mayor desigualdad de nuestras sociedades. En efecto, un gran porcentaje de los privados de libertad proviene de las franjas más excluidas y desfavorecidas en términos económicos. Los individuos analfabetos o con niveles de educación muy bajos constituyen un perfil muy común entre la población penitenciaria. Es una realidad que la gran mayoría de estas personas no pudieron formarse y muchas de ellas nunca ejercieron un trabajo en la economía formal. Estos individuos desconocen a menudo su estatus de titulares de derechos, y por ende, las vías para ejercerlos. Por ello, es de vital importancia brindarles una atención particular; enseñarles que tienen derechos, facilitar su ejercicio y trabajar en su ampliación si queremos cambiar la realidad actual de la cárcel como instrumento potente de exclusión social y de ampliación de desigualdades que ya resultan preocupantes per se.

“La cárcel es seguramente el espacio donde se concentra la mayor desigualdad de nuestras sociedades”

Esta situación nos obliga a seguir profundizando nuestras intervenciones. Si no cabe la menor duda de que, a lo largo de los últimos años, se han obtenido avances fundamentales para el respeto y el ejercicio de los derechos de los privados de libertad, todavía queda mucho por hacer. Siguiendo el trabajo emprendido y ampliando los esfuerzos, sabemos que no podemos prescindir de una reflexión más amplia sobre la privación de libertad. Podemos reformar y modernizar los sistemas, asignarles más profesionales, garantizar cada vez más los derechos, los resultados de todos estos esfuerzos se ven ineluctablemente limitados por el aumento constante del número de personas privadas de libertad. Quizás sea el momento de tratar la política en sí misma en vez de centrarse en sus consecuencias.

Desde hace varios años, las políticas penales han tenido como consecuencia un aumento, en algunos casos extremadamente alto, del número de privados de libertad. Al mismo tiempo, y salvo raras excepciones,

las tasas de inseguridad han seguido creciendo, demostrando, al menos en parte, la ineficacia de esta política, que además tiene un coste muy alto. ¿Queremos seguir con una política económicamente ineficiente, humanamente perjudicial y políticamente engañosa? Quizás haya llegado también el momento de una reflexión amplia sobre la privación de libertad y la puesta en marcha de medidas alternativas al encarcelamiento. No se trata de sacar a todo el mundo de la cárcel, sino de diferenciar a los que sí tienen que ser privados de libertad por representar un peligro para la sociedad y los que perfectamente pueden ejecutar su pena bajo otra modalidad. Tal evolución, que podría reducir el gasto público al limitar de manera importante el número de privados de libertad, permitiría también una ejecución más útil de la pena y una disponibilidad más grande de los actores que intervienen

La voluntad puede mover montañas. La voluntad política debe cambiar realidades insatisfactorias. Puede que el camino sea largo, pero no parece haber otro. Las personas privadas de libertad, cualquiera que sea la gravedad de sus faltas, merecen atención, respuestas, perspectivas y derechos como cualquier ser humano. Démosles la oportunidad de reintegrar nuestro espacio social en lugar de aislarlos aún más si cabe. Por el momento, no tienen mucha esperanza pero sí razones para esperar: a lo largo de los cuatro últimos años, tuvimos el privilegio de trabajar con mujeres y hombres, responsables políticos, Defensores públicos y actores de los sistemas penitenciarios penitenciarios, lo que nos ha permitido apreciar su compromiso y su determinación para mejorar la situación de los privados de libertad. De ellos vendrán los cambios y las reformas y, por eso, tenemos



“Las personas privadas de libertad, cualquiera que sea la gravedad de sus faltas, merecen atención, respuestas, perspectivas y derechos como cualquier ser humano”

en este ámbito para garantizar procesos más eficaces de inserción y un mayor respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Esto no resulta complicado en términos técnicos ni costoso desde un punto de vista económico, pero sí ventajoso en términos políticos. ¿A qué estamos esperando?

que seguir apoyándolos en su carrera por conseguir sociedades más cohesionadas y tratamientos equitativos para los privados de libertad.



Arkel Benítez,
Secretario General

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)

La COMJIB es una organización internacional que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 21 países de la Comunidad Iberoamericana.

Tiene como objetivo principal la promoción de las políticas públicas del sector Justicia y Seguridad, buscando alianzas estratégicas entre países con el compromiso de mejorar la calidad de la justicia que se ofrece a los ciudadanos.

El actual Secretario General es D. Arkel Benítez Mendizábal.

Como socio, ¿qué valor añadido considera que aporta EUROsociAL como programa de cooperación al desarrollo?

COMJIB ha venido participando como socio operativo financiero en cuatro proyectos del Programa: MASC, Lucha contra la violencia de género, Lucha contra la corrupción e Inserción socio-laboral de las personas privadas de libertad. Las acciones diseñadas giran en torno a intereses y desafíos co-

munes de los países participantes, contribuyendo al diseño e implementación de políticas públicas estratégicas e innovadoras a nivel regional.

EUROsociAL se convierte así en una marca reconocible y perfeccionada en el enfoque a la demanda que conjuga de manera eficiente los niveles nacional y regional en su lógica de actuación.

Por su parte, COMJIB es fundamentalmente un organismo de carácter político que in-

corpora el principio de apropiación de los proyectos que desarrolla, implicándose los gobiernos en las acciones realizadas.

Destacamos también que EUROsociAL actúa como catalizador de procesos vinculados con la cohesión social en América Latina, a nivel internacional, regional y nacional. La conjugación de las fortalezas del programa con la naturaleza de COMJIB ha permitido posicionar en el orden regional acuerdos y estándares de actuación en un tiempo record.

En pocas palabras...

Un logro:

Generación de procesos de transformación de políticas y consensos regionales

Una lección aprendida:

La importancia de la cooperación sur-sur y de la cooperación triangular para avanzar hacia sociedades más igualitarias e integradas

Una idea para el futuro:

Favorecer la realización de actividades verdaderamente transversales

EUROsociAL en tres palabras:

Innovación, eficacia y cooperación institucional entre pares



Los socios tienen



Elizabeth Johnston,
Directora Ejecutiva

Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS)

Organización No Gubernamental que reúne 250 autoridades locales. Más de 25 años de trabajo en seguridad urbana con un enfoque integral, han posicionado al Efus como organización experta en prevención de la violencia, siendo la única red Europea de 250 ciudades trabajando por la Seguridad Urbana. El Efus actúa como un lugar de diálogo, reflexión y cooperación. Favorece los intercambios de experiencias positivas, contribuye tanto a estimular como a orientar las políticas locales, nacionales y comunitarias en materia de prevención de la inseguridad urbana y de tratamiento de la delincuencia.

Como socio, ¿qué valor añadido considera que aporta EUROsociAL como programa de cooperación al desarrollo?

Como socios operativos del eje de Seguridad Ciudadana consideramos que el programa EUROsociAL ha innovado en la manera de hacer cooperación internacional. En primer lugar, la promoción del aprendizaje colectivo entre pares permite que las instituciones conozcan metodologías de trabajo realiza-

das por sus contrapartes en otros países, apliquen y gestionen este conocimiento para mejorar el trabajo en políticas públicas. En segundo lugar, reconocer los espacios de intercambio creados por el programa a nivel regional. En temas tan complejos como el de la seguridad ciudadana, EUROsociAL ha logrado generar una conciencia del trabajo colectivo entre países así como una consolidación de herramientas comunes que fortalecen las políticas públicas de la región.

En tercer lugar, y no menos importante la incidencia del enfoque en la demanda que promueve el programa en la eficacia de los recursos públicos. Al potenciar iniciativas provenientes de las instituciones de los países con los que se trabaja, el programa asegura empoderamiento y por lo tanto genera un impacto positivo en las medidas que promueve.

En pocas palabras...

Un logro:

Posicionar el tema de la coordinación de actores para la correcta gestión de las Políticas de Prevención de la Violencia y el Delito

Una lección aprendida:

La coordinación no se limita al trabajo con las institucionales nacionales y locales, es también la coordinación de los actores in-

ternacionales presentes en el territorio

Una idea para el futuro:

Promover la formulación de Políticas Públicas de abajo hacia arriba "bottom-up"

EUROsociAL en tres palabras:

Innovación en cooperación internacional



Carlos Carnicer,
Presidente

Fundación Abogacía Española

La Fundación Abogacía Española fue creada por el Consejo General de la Abogacía Española en el año 2003 con el propósito de defender y promover los Derechos Humanos y la cooperación internacional. Desde entonces llevamos a cabo proyectos tanto a nivel nacional como internacional.

Uno de los principales pilares de nuestro trabajo es el Acceso a la Justicia de grupos de personas vulnerables y uno de los medios para alcanzar ese fin se canaliza a través de la sensibilización y la formación a los abogados.

Como socio, ¿qué valor añadido considera que aporta EUROsociAL como programa de cooperación al desarrollo?

El hecho de que el Programa responda a las demandas expresas de las instituciones, que a su vez forman parte de las prioridades de

las políticas públicas en cada respectivo país, es una garantía de coherencia en el modo de enfocar la cooperación.

De esa forma, EUROsociAL acompaña a instituciones de la Administración en la creación de políticas públicas que generan cambios estructurales en la sociedad.

En pocas palabras...

Un logro:

Firmas de Convenios de coordinación interinstitucional entre organismos de distintos Ministerios

Una lección aprendida:

La identificación de las propuestas de demanda y su desglose técnico en el nivel operativo es fundamental para garantizar la

Las asistencias técnicas previstas para ello son asumidas por funcionarios públicos generalmente pertenecientes a instituciones homólogas de otros países, tanto de la región como de la Unión Europea, lo que fomenta el intercambio de experiencias y de buenas prácticas a través de un modelo de cooperación en muchos casos triangular:

buena ejecución de las actividades y el logro de resultados

Una idea para el futuro:

Generar espacios específicos para identificar y evaluar, al margen del periodo anual de ejecución

EUROsociAL en tres palabras:

Intercambio, buenas prácticas

la palabra



Irene Khan,
Directora General

Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO)

La Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) es la única organización intergubernamental dedicada exclusivamente a promover el Estado de Derecho. IDLO habilita a los gobiernos y empodera a las personas para reformar las leyes y fortalecer las instituciones para fomentar la paz, la justicia, el desarrollo sustentable y las oportunidades económicas

Como socio, ¿qué valor añadido considera que aporta EUROsociAL como programa de cooperación al desarrollo?

Hay tres aspectos que destacar como valor añadido de EUROsociAL como programa de cooperación al desarrollo. Primero, EUROsociAL identifica las temáticas concre-

tas para avanzar en la construcción de la cohesión social en la región, en particular, a través del área de justicia. Segundo, EUROsociAL asegura que la cooperación se hace en el marco de políticas públicas vigentes o en construcción, logrando con esto sostenibilidad en las iniciativas. Y, tercero, la metodología de trabajo de EUROsociAL asegura la participación y articulación de los actores

involucrados, la identificación e intercambio de buenas prácticas, propiciando con ello la construcción de enfoques regionales. Este abordaje permite que EUROsociAL propicie cambios y avances a nivel nacional así como diálogos estratégicos a nivel regional. Estos tres aspectos resaltan la visión e impacto regional que el programa tiene como principal valor añadido

En pocas palabras...

Un logro:

Identificar y avanzar en temáticas regionales estratégicas para la cohesión e inclusión social consolidadas

Una lección aprendida:

La cooperación basada en el diálogo de saberes y apoyada en una asistencia técnica sólida genera resultados e impactos a largo plazo

Una idea para el futuro:

Consolidar respuestas enfocadas en los beneficiarios finales, intersectoriales, articuladas y con enfoque de derechos por parte del Estado es la clave para el fortalecimiento de la democracia

EUROsociAL en tres palabras:

Cooperación, construcción, institucionalidad



Karima Zouaoui,
Directora General

Justice Cooperation Internationale

El GIP Justice Coopération Internationale es el operador de las instituciones judiciales y federa al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Administración Penitenciaria, el Consejo Nacional de Abogados, el Consejo Superior de Notariado y la Cámara Nacional de Auxiliares de la Justicia. A lo largo de los años, JCI y su equipo multidisciplinario de expertos, dirigido por la magistrada Karima Zouaoui, ha extendido y confirmado su campo de acción y ejecutado más de 50 proyectos en diferentes regiones del mundo.

Como socio, ¿qué valor añadido considera que aporta EUROsociAL como programa de cooperación al desarrollo?

Desde JCI uno de los puntos relevantes del Programa EUROsociAL es, en primer lugar, la creación de sólidos vínculos con las instituciones contrapartes y la sincera relación

de confianza que se estableció a lo largo de los años.

Cabe mencionar también el trabajo tanto a nivel nacional como regional así como el desarrollo de la cooperación Sur-Sur que generó el programa. Estos dos aspectos son elementos claves dentro de los objetivos del programa, esto es, el desarrollo de la

cohesión social en América Latina.

Por fin, como socio, nos parece muy importante destacar la real apropiación por los países beneficiarios y el intercambio de buenas prácticas entre la UE y los países de América Latina, lo que constituye un logro significativo.

En pocas palabras...

Un logro:

Los manuales y protocolos establecidos, tanto a nivel nacional como regional

Una lección aprendida:

El necesario trabajo de fondo para entender las necesidades y construir un intercambio de conocimientos productivo y duradero

Una idea para el futuro:

Ampliar el trabajo y seguir trabajando en los objetivos de reducción de las desigualdades

EUROsociAL en tres palabras:

Solidaridad, confianza y enriquecimiento mutuos



Los socios tienen la palabra



Cristina Goñi,
Secretaria General

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ)

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) es una Fundación belga de Utilidad Pública con sede en Bruselas, que desde 2002 trabaja por los derechos de los niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social, especialmente aquellos en conflicto con la ley o inmersos en ciclos de violencia y delincuencia. Las actividades de cooperación técnica del OIJJ abarcan desde las políticas de seguridad ciudadana y la administración de justicia para adolescentes hasta las políticas criminales y penitenciarias.

Como socio, ¿qué valor añadido considera que aporta EUROsociAL como programa de cooperación al desarrollo?

Uno de los principales valores añadidos del programa EUROsociAL II es que facilita el diálogo regional y bi-regional entre instituciones públicas europeas y latinoamericanas, lo que ha favorecido la armonización de buenas prácticas en la región y, por otro

lado, ha contribuido a la discusión bi-regional favoreciendo el trabajo colectivo y la producción de conocimiento compartido.

Un segundo valor añadido es que el programa y sus socios se han configurado como una red de instituciones públicas que favorece el acceso e intercambio de conocimiento entre administraciones públicas homólogas, lo que permite compartir y recoger lecciones aprendidas por otras ins-

tituciones en procesos de construcción de políticas públicas así como en la generación de instrumentos concretos.

El tercer valor añadido es que la metodología e instrumentos que el programa utiliza favorecen la eficacia, la reducción de costes y la innovación en los procesos de construcción de políticas públicas.

En pocas palabras...

Un logro:

La adopción del Modelo Regional de Política Integral para la Prevención de la Violencia y el delito y la Aprobación del CONPES de Prevención de delincuencia Juvenil en Colombia

Una lección aprendida:

Invertir más recursos en la medición del impacto que nuestra asistencia técnica ha

generado y en la capitalización de procesos

Una idea para el futuro:

Favorecer la participación de actores en pensamiento crítico, academia y sociedad civil

EUROsociAL en tres palabras:

Progreso, eficacia e innovación en política pública



“Alrededor de la mitad de los homicidios -el 46,3 por ciento- son causados por armas de fuego”



Armas de fuego en Latinoamérica

Embajador Adam Blackwell
Ex-Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA

Al reflexionar sobre mi administración como Secretario de Seguridad Multidimensional, llegué a la conclusión de que hay algunos problemas que afectan a la (in)seguridad en la región de las Américas más que en otras. En mi opinión, los temas que impulsan esta inseguridad pueden ser entendidos gracias a una ecuación o fórmula. Esta fórmula consta de tres factores, los cuales analizados en conjunto, son indicativos de niveles mayores de crimen y violencia, insatisfacción con la democracia, y mayor desconfianza entre los ciudadanos y sus instituciones. Los tres factores que nos llevan a tales resultados son representados por: 1) vulnerabilidades sociales, 2) fragilidades estatales e institucionales, y 3) aceleradores. Por ende, identificar la raíz del problema, las graves consecuencias y los factores causales así como la relación entre ellos es fundamental para poder llevar a cabo un análisis de seguridad efectivo. Esta ecuación nos permite plantear la discusión y trazar una hoja de ruta

para soluciones futuras, convirtiendo así simples conversaciones en acciones tangibles.

Para este artículo pensé en centrarme en uno de los aceleradores, las armas de fuego, debido al alto porcentaje de homicidios y crimen general relacionados con este tipo de acelerador en la región. Según el estudio “Global Burden of Armed Violence 2015,” la tasa de muertes causa-

“Identificar la raíz del problema, las graves consecuencias y los factores causales así como la relación entre ellos es fundamental para poder llevar a cabo un análisis de seguridad efectivo”

das por armas de fuego desde el 2007 al 2012 fue de 3 por cada 100.000 personas. Además, aproximadamente 174.600 personas fallecieron anualmente debido a homicidios relacionados con armas de fuego en el mismo periodo. Mientras tanto, en Sudamérica, la tasa de homicidios relacionados con armas de fuego es de 10,3 por cada 100.000 personas y, en el Caribe

y Centroamérica, el índice es 22,5 y 28,8 personas respectivamente. Además, a diferencia del resto del mundo, la tasa en las Américas continúa aumentando!

El análisis de las estadísticas más recientes, partiendo nuevamente del “Global Burden of Armed Violence 2015,” también sugiere que alrededor de la mitad de los homicidios -el 46,3 por ciento- son causados por armas de fuego. A pesar de que la cobertura de la investigación no sea constante, la información desagregada sobre el uso de armas de fuego en homicidios arroja una

mejor comprensión sobre el tema en general. Nos demuestra, por ejemplo, que las sub-regiones con mayores porcentajes de homicidios relacionados con armas de fuego -en orden descendente, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica- también

son aquellas con mayores tasas de homicidios.

Un titular de un periódico rezaba “Jefes de policía debaten soluciones al aumento del crimen,” respecto a una reunión de jefes de policía de grandes ciudades para lidiar específicamente con el alza de la tasa de homicidios refiriéndose específicamente al incremento de la tasa de homicidios, a la vez que culpaba de parte de este aumento



Adam Blackwell

a “delinquentes reincidentes, drogas y armas de fuego con cargadores más grandes.”² No, no se trata de un titular de Centroamérica, sino de una reunión que se llevó a cabo en Washington, D.C., que reunió a jefes de policía de grandes ciudades en Estados Unidos. Hace relativamente poco, el Jefe de

número enorme de armas de fuego ilícitas al alcance de las personas.

Quizás es el momento de comenzar a pensar fuera del marco ya existente y reclutar el apoyo de los productores y vendedores de armas y municiones. Por ejemplo, ¿podríamos exponer públicamente qué equipo fue utilizado para la comisión de un homicidio determinado y de dónde se obtuvo el arma originalmente? Esta información está disponible principalmente gracias a “e Trace” y otros sistemas de control y rastreo. Pero, quizás, ¿podríamos humillar a los mayores vendedores y productores hasta que se tomen medidas adecuadas? En condiciones normales no apoyaría una estrategia de nombramiento-y-humillación pero puede que ésta sea la única manera de crear un esfuerzo conjunto para encontrar una solución adecuada.

“La OEA ha desarrollado diversos programas de marcación, seguimiento, y destrucción de armas de fuego y municiones”

Policía de Toronto, Canadá, lamentó lo mismo de su ciudad.

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto?

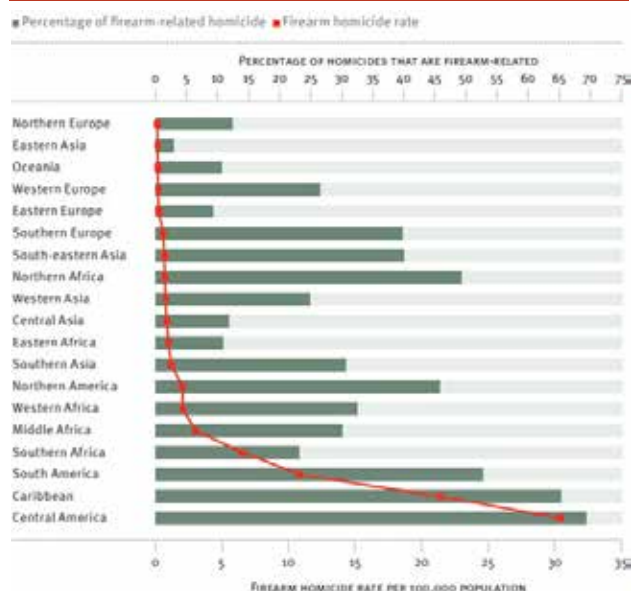
La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el derecho a portar armas, ha sido objeto de debate durante los últimos doscientos años y probablemente continúe siéndolo durante los próximos dos siglos. Sin embargo, esto no debería ser una excusa para mantenernos inertes.

Estoy convencido de que existen leyes y convenios vigentes en Estados Unidos y en otros lugares que limitan el flujo de armas de fuego ilegales e ilícitas a través de nuestras fronteras. Desde 1997 existe una convención jurídicamente vinculante, ratificada por 32 países, titulada Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA). La creación de esta convención es un claro reflejo de las preocupaciones de los estados miembros con respecto a este tema.

Para apoyar esta convención, la OEA ha desarrollado diversos programas de marcación, seguimiento, y destrucción de armas de fuego y municiones. También existen excelentes programas de educación y prevención apoyados por intercambios de buenas prácticas así como de voluntarios. Desafortunadamente, todas estas iniciativas no resultan suficientes ya que todavía hay un

“Quizás es el momento de comenzar a pensar fuera del marco ya existente y reclutar el apoyo de los productores y vendedores de armas y municiones”

Promedios de tasas y porcentajes de homicidios por armas de fuego, por sub-región, 2007-2012¹



¹ Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts. (2015). Geneva Declaration on Armed Violence and Development. Available from http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch2_pp49-86.pdf

² Simpson, Ian. (August 3, 2015) “Police chiefs discuss solutions to crime surge.” Reuters. Available from <http://www.reuters.com/article/2015/08/03/us-usa-police-summit-idUSKCN0Q81RB20150803>



Costa Rica: Sueños y esperanzas de mujeres sobrevivientes de violencia

Ligia Blanco Villegas, beneficiaria de la Casa de los Derechos de las Mujeres de Upala

Casa de los Derechos de las Mujeres de Upala
Teresita Arana Cabalceta, Comunicadora

Un modelo de actuación que orienta, asiste y protege a mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas víctimas de violencia en ese cantón.

Eran las 3:20 a.m. del 3 de julio anterior cuando tocaron a la puerta de la Casa de los Derechos de las Mujeres en Upala. En la oscuridad se reflejaba el rostro sufriente de una mujer que, horas antes, había sido víctima de violencia doméstica por parte de su ex compañero sentimental.

“Él llegó borracho esa noche, me arrebató mi teléfono y lo reventó contra el piso (...) Me atacó violentamente, me golpeó por todo el cuerpo, principalmente en la cara y cabeza, me arrastró del pelo por la casa. Como pude, logré escapar y pedí ayuda a la Fuerza Pública, así logré sobrevivir”. Con estas palabras y una triste mirada, compartió su testimonio Ligia Blanco Villegas, a quien el juzgado ha otorgado medidas de protección para pre-

venir más ataques del agresor.

“La policía me llevó al hospital y luego me trasladó a la Casa de los Derechos de las Mujeres. Nunca me imaginé que existía una casa hogar donde me podían ayudar... Aquí me han tratado muy bien desde que llegué,



Casa de los Derechos de las Mujeres de Upala, Costa Rica

me tendieron la mano y me ofrecieron techo, alimentación y mucho apoyo psicológico para seguir adelante”, añadió esta mujer de 45 años, madre de cuatro hijos, quien además padece fuertes dolores en la columna y riñones, situación que le impide trabajar.

La Casa de los Derechos de las Mujeres en Upala, ubicada cerca de la frontera con Nicaragua, representa una experiencia piloto única en Costa Rica y novedosa en la región. Funciona como un centro de



Dolores Corrales Almendares, Administradora de la Casa de los Derechos de las Mujeres de Upala

atención donde las mujeres adultas o adolescentes en situaciones de violencia bajo cualquiera de sus formas pueden obtener información, orientación y asistencia legal. Adicionalmente, se ofrece refugio temporal hasta por 72 horas.

Desde sus inicios en enero de 2014, un total de 185 mujeres han sido atendidas en la Casa de los Derechos de la Mujer; entre las que se encuentran mujeres que buscan apoyo y orientación legal para regularizar su situación migratoria y poder tener acceso a sus derechos fundamentales.

Dolores Corrales Almendares, de la Fundación Cenderos, es la persona encargada de administrar la Casa. Es ella quien recibe de primera mano a las mujeres que recurren día a día a este lugar.

“Aquí recibimos a las mujeres en el momento que lo requieran, estamos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Les brindamos apoyo psicológico y legal”.

“Todavía tengo mucho miedo, uno tiene que ser muy fuerte para salir adelante en medio de la pobreza y las necesidades; sin embargo, gracias al apoyo que he encontrado aquí, sueño con un futuro mejor para mi vida”; resaltó Ligia Blanco.

Actores comprometidos con la protección de mujeres víctimas de violencia

La Casa es la culminación del proyecto liderado por el Poder Judicial de Costa Rica con el auspicio del Programa EUROsociAL II gracias al cual se construyó participativamente el Modelo de atención de las mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas, víctimas de distintas formas de violencia en una zona con altos índices de vulnerabilidad y pobreza, así como graves situaciones de violencia y exclusión.

“La Casa de Derechos de las Mujeres de Upala, representa un esfuerzo exitoso que une el trabajo del Poder Judicial con el que desempeñan distintos sectores públicos y privados. Es un trabajo que pretende dar una respuesta coordinada, sostenible, e integral a la situación de mujeres en estado de vulnerabilidad”, resaltó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Magistrada Zarela Villanueva Monge, quien además considera que *“este modelo de atención pretende contribuir a la protección y restitución de los derechos de las mujeres que participan de estos flujos migratorios que residen en la Zona Norte del país, cercana a la frontera con Nicaragua, y se lleva a cabo mediante un mecanismo de coordinación y articulación entre el Poder Judicial y las instituciones públicas de la sociedad civil implicadas en la atención, orientación y asistencia a esas mujeres. Debemos responder de manera más efectiva y real a los requerimientos de las poblaciones, con un enfoque humanista y democrático”.*

Para la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, resulta prioritario el fortalecimiento de los mecanismos regionales de coordinación y seguimiento de los instrumentos internacionales que promueven los Poderes Judiciales y Tribunales Supremos de Justicia de la Región, por medio de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, entre otros. *“En cada país, la experiencia del Programa EUROsociAL II ha demostrado que debemos orientar nuestros esfuerzos a brindar servicios con vocación de acercamiento geográfico respecto a las necesidades diversas de cada población”,* subrayó.

“Nuestra visión a futuro de la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad es una visión humanista, democrática y sustentada en un enfoque de derechos, donde la justicia debe ser un servicio público que se mida en función de la respuesta que brindemos a estas poblaciones, mediante iniciativas para el mejoramiento del acceso a la justicia”, puntualizó la Magistrada Villanueva Monge. Este proyecto se inscribe en el marco de las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, y forma parte de los proyectos que llevan a cabo la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas Migrantes y Refugiadas y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj). Su éxito reside principalmente en un trabajo articulado comunitario a nivel interinstitucional, tanto de entidades públicas como de la sociedad civil, implicadas en la atención a mujeres víctimas de violencia doméstica.



Magistrada Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

La Casa funciona bajo la administración de un comité de gestión y seguimiento compuesto por la Fundación Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos), Juzgado Mixto, Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, Fuerza Pública, Instituto Nacional de las Mujeres, Dirección General de Migración y Extranjería, Cruz Roja, Hospital de Upala, Instituto Mixto de Ayuda Social, Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Upala, institución coordinadora del mecanismo.

Además de este modelo de atención, el Poder Judicial ha ejecutado otros proyectos de alto impacto con la cooperación del Programa EUROsociAL II de la Unión Europea, entre los que destaca la conformación de la “Red Interinstitucional para la atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares en condiciones de vulnerabilidad”,

ejecutado por la Defensa Pública de Costa Rica. Esta red articula ocho instituciones que dan respuesta a las necesidades básicas de estas mujeres mediante subsidios económicos, becas, formación humana y

técnica, atención psicológica y tratamiento de drogodependencias.

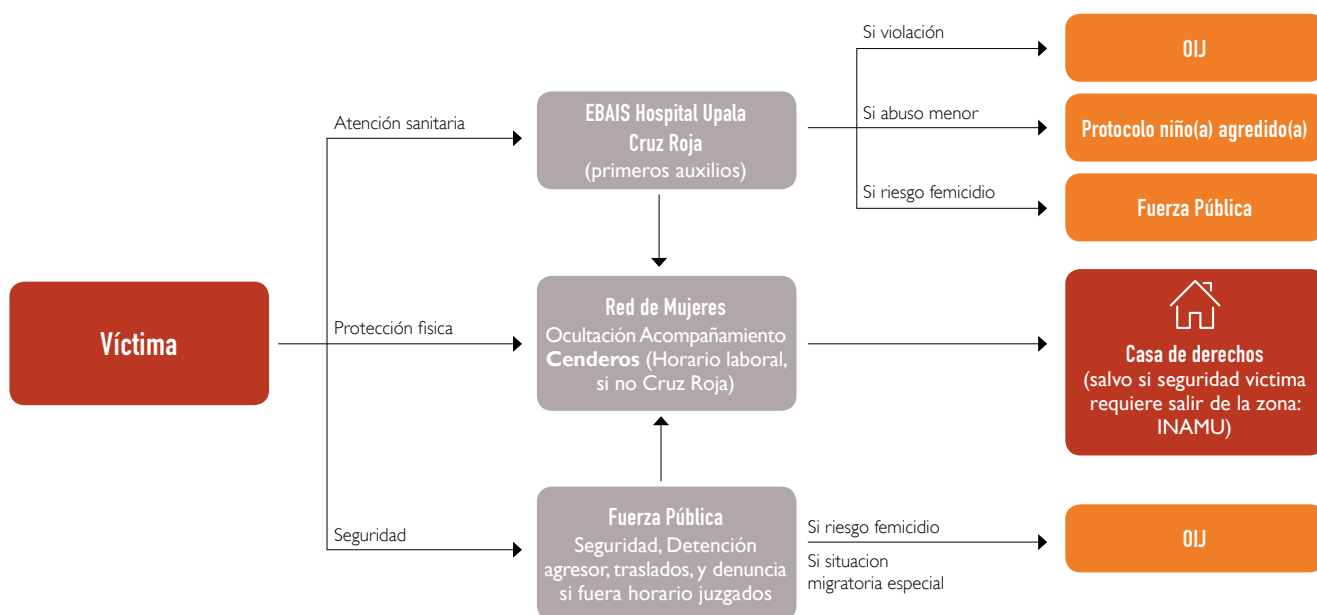
La buena práctica desarrollada por esta Red Interinstitucional, bajo auspicio de EUROsociAL II, fue resaltada por el Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, durante su informe de Rendición de Cuentas el pasado 1 de mayo cuando afirmó: “... *Con el mismo afán de continuar generando condiciones para la familia y el acceso de trabajo para las mujeres, recientemente promovimos el protocolo de atención integral a mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes en situaciones de vulnerabilidad, que establece condiciones y oportunidades para mujeres que han pasado por el proceso penal y desean construir un proyecto de vida digno para ellas y sus familias*”; y será adoptada por el Estado costarricense como política pública.

La Defensa Pública de Costa Rica se ha caracterizado por contar con una política institucional de servicio público con perspectiva de género. Gracias a la cooperación de EUROsociAL II, ésta ha fungido como referente de buenas prácticas para otras Defensorías Públicas en América Latina. Tal es el caso de la Defensoría General de la

Nación Argentina, que está implementando esta buena práctica costarricense.

Las iniciativas ejecutadas con el apoyo de EUROsociAL II han sido posibles gracias a la gestión exitosa de proyectos de cooperación internacional que realiza la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial.

Ruta de atención primaria en caso de emergencia





Más derechos para la mujer en América Latina

Cécile Bande y Marc Reina

Técnicos de Proyectos de la Unidad Técnica de Justicia y Seguridad Ciudadana. Programa EUROsociAL

*“La igualdad y la equidad entre hombres y mujeres son indispensables para su bienestar, el de su familia y la consolidación de la democracia”
(Artículo 3 CEDAW)*

La nueva Agenda del Desarrollo, oficialmente llamada Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y coloquialmente llamada Agenda post-2015, requerirá de un liderazgo incesante en relación a la lucha contra la pobreza, las desigualdades y el cambio climático. Si bien el objetivo de poner fin a la pobreza (Objetivo 1) es uno de los más relevantes, la búsqueda de la igualdad de género (Objetivo 5) y el acceso a la justicia de las mujeres en situación de vulnerabilidad (Objetivo 16) constituyen tres pilares esenciales de esta nueva Agenda de Desarrollo.

La necesidad de superar la discriminación de las mujeres a nivel judicial ha llevado a logros remarcables a nivel internacional en el ámbito jurídico e institucional. Ratificada por 189 países desde su adopción en 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) junto al Comité de 23 expertas creado *ad hoc* bajo el artículo 7 de la Convención, estableció una agenda vinculante para los estados partes a la misma con el objetivo claro de mejorar los derechos de las mujeres.

Garantizar el igual acceso a la justicia para todas las personas mediante la mejora de los derechos de las mujeres, pero sobre todo para las mujeres en situación de vulnerabilidad, es una de las principales aproximaciones en la lucha por la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra la mujer, las niñas y los niños. En este sentido, la mejora del acceso a la justicia de las mujeres no sólo lleva a sociedades más cohesionadas y a una convivencia social pacífica, sino que además permite dar una respuesta judicial efectiva a casos de, por ejemplo, violencia y exclusión.

Desde una perspectiva más amplia, el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres pasa por la consolidación del acceso a la justicia, pero también del acceso a la educación, la salud en todos sus componentes, el empleo y al derecho a vivir en un entorno sin violencia.

Violencia contra las mujeres

Calificada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres y el feminicidio son fenómenos globales que afectan en mayor o menor medida a todos los países.

Según la Organización Panamericana de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), entre el 25 y el 50 por ciento de las mujeres latinoamericanas declaran haber sufrido alguna vez violencia por parte de un compañero íntimo, y entre el 17 y el 47,8 por ciento de las mujeres casadas o en unión han sufrido alguna vez maltrato emocional por parte de su pareja. Si bien los porcentajes pueden variar mucho entre países y regiones, los datos a nivel latinoamericano son preocupantes. Al mismo tiempo, según la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), sólo un 14 por ciento de los casos de violencia son denunciados.

“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”
(Artículo 3, Convención de Belém do Pará)



La prevención y erradicación de la violencia de género ha de surgir de las instituciones estatales, locales y de la sociedad civil, prestando servicios de intervención y garantizando el acceso a los derechos y a la justicia a todas aquellas mujeres, migrantes o nacionales, jóvenes o adultas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que han sufrido violencia.

En este sentido, el impulso dado por la Unión Europea con la financiación de programas y acciones concretas para la mejora en los derechos de la mujer; y muy particularmente para la sensibilización y la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas y niños, involucrando a los Estados Miembros y a la sociedad civil, ha permitido poner de relieve la necesidad de que las intervenciones sean coordinadas e integrales entre todos los actores, nacionales o internacionales, con el fin de encontrar una solución duradera a este fenómeno y al desigual acceso a la justicia de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Tanto las formas de violencia más extremas como los feminicidios, pasando por el abuso sexual, la violencia psicológica y emocional como la humillación o el insulto, hasta la utilización de lenguaje sexista, requieren un abordaje desde varios ámbitos, en particular de la justicia, la seguridad ciudadana, la sanidad y la educación. Además, esta intervención tiene que venir dada por una igualdad de facto en derechos, deberes y ante la justicia para todas las personas. Poner de relieve que la violencia de género constituye un problema de salud pública y de educación llevarán a invertir mayores recursos para su erradicación, pero, sobre todo, para su temprana prevención.

Desde este punto de vista, la articulación de mecanismos de denuncia, protección y asistencia de todo tipo que sean eficientes, rápidos y de fácil acceso para todas las mujeres, vivan en grandes ciudades o en zonas rurales, es uno de los retos que se deben abordar de modo inmediato. Por otro lado, la realización de encuestas de victimización de mujeres, así como la recolección generalizada de datos, mediante indicadores homogéneos para la región con los que se puedan orientar las políticas públicas a nivel estatal y local, debería convertirse en un asunto prioritario en las agendas latinoamericanas.



Las políticas de seguridad: ¿Elegir entre represión y prevención? No, cambiar de paradigma

Xavier Cousquer y Marc Reina

Unidad técnica de Justicia y Seguridad Ciudadana. Programa EUROsociAL

Durante la última década, América Latina ha experimentado unas tasas medias de crecimiento económico superiores a los dos dígitos. Este crecimiento ha provocado una reducción constante de los niveles de pobreza, a la vez que ha puesto en tela de juicio un principio indiscutible hasta el momento: el crecimiento económico lleva *per se* a la disminución de las desigualdades sociales y de la violencia letal. La realidad ha sido contraria, poniendo de manifiesto niveles preocupantes de violencia en la sociedad.

Los países de América Latina, particularmente de Centroamérica y México, co-

nocen las tasas de violencia más altas del mundo. Mientras que la mayor parte de regiones del mundo han visto una disminución considerable de los homicidios, en América Latina y el Caribe, la tasa ha aumentado de un 12 por ciento en una década, superando la cifra de un millón de homicidios para este período (PNUD, 2014). Si bien existen diferencias sustanciales a nivel subregional y de país – por ejemplo, en los países del Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, la tasa ha disminuido hasta situarse por debajo de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, particularmente la tasa es baja en Chile con 4,6 homicidios – en otros países como

Honduras la tasa es de 85,5 homicidios por cada cien mil habitantes (OMS, 2014).

Dentro de los segmentos de la población, la violencia letal afecta desproporcionadamente a la población juvenil en toda la región, pero, en particular en América Central. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calculan que, en la región centroamericana, la tasa de homicidios de jóvenes entre 15 y 29 años es cuatro veces superior a la media global para este grupo de edad, estimándola en alrededor de 70 homicidios por cada 100.000 jóvenes.

Esta situación es preocupante no solo por las numerosas víctimas que causa la violencia sino también porque afecta la cohesión social y la estabilidad de algunos Estados de la región. Frente a esta problemática, la tentación ha sido grande, a lo largo de los últimos años, de diseñar e implementar políticas de “mano dura”. Si bien no se puede cuestionar la necesidad de medidas represivas para tratar de enfrentar estos fenómenos violentos, los resultados obtenidos demuestran que no son suficientes para reducir de manera significativa los niveles de inseguridad.

perder” y sobre las cuales la agravación de la represión tiene un impacto quizás muy limitado.

La realidad es que, durante mucho tiempo, a través de políticas esencialmente represivas, se ha pretendido restablecer la seguridad, atacándose únicamente a las consecuencias de la violencia. Si no se quiere tomar en cuenta las causas profundas de la violencia, estas políticas están abocadas al fracaso. Así mismo, este enfoque ha representado unos costos muy elevados para las arcas públicas latinoamericanas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa

Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que no nos podemos limitar a una visión simplista de un fenómeno que ya describimos como altamente complejo. Queda claro que el mero hecho de invertir en políticas sociales voluntarias hacia jóvenes de clases sociales muy bajas, no resulta suficiente para limitar, por sí solo, los niveles de inseguridad. Cuando la violencia es omnipresente en los medios de comunicación y resulta casi más fácil comprar una pistola que un celular, es evidente que no se puede responder a un fenómeno multicausal con un solo eje de intervención. Sin embargo, las desigualdades y la pertenencia a sectores particularmente desfavorecidos de la sociedad constituyen un punto común entre muchísimos delincuentes y criminales en América Latina. No lo explica todo, pero, tampoco es una coincidencia.

Por lo tanto, el fortalecimiento de las políticas de prevención de la violencia tiene que ser contemplada como un medio para reforzar las políticas de seguridad en su conjunto. Más allá, un reequilibrio de estas políticas hacia intervenciones sociales es más que deseable. En muchos países, parece necesario expandir la participación de los sectores sociales hasta centrar estas políticas en la reducción de las desigualdades. Esto constituye sin duda un cambio de paradigma que implica la necesidad de reorientar en profundidad el enfoque central de estas políticas.

Frente a los resultados contrastados obtenidos a través de políticas “clásicas” de seguridad, quizás haya llegado el momento de innovar e intentar nuevas lógicas de intervención. Construir estas políticas a partir de la reducción de la exclusión social y de la promoción del trabajo para jóvenes, agrupando y coordinando a todos los actores que intervienen en esta materia es, sin duda, un desafío muy ambicioso. Sin embargo, este nuevo abordaje podría tener un impacto diferencial fuerte con respecto a las políticas tradicionales. Esto daría un sentido mucho mayor a las políticas de prevención y devolvería a las políticas represivas su carácter simbólico y fuerte que hoy día ha quedado relegado a un segundo plano, debido a un uso ciego y sistemático. Una política eficaz en materia de seguridad no tiene que plantearse la disyuntiva entre represión y prevención, pero, un cambio de paradigma le podría dar un impacto distinto, más humano, pero, sobre todo, más eficiente.



En muchos países de la región, los hechos violentos los cometen en su mayoría los jóvenes, mayores o menores de edad. Sin embargo, más allá de subrayar que los jóvenes son cada vez más violentos, no se suele tratar de entender las causas profundas de esta violencia.

Sin duda, la información más interesante en esta materia no es tanto la edad de los autores de violencia sino claramente sus orígenes sociales.

En la gran mayoría de los casos, la violencia es el resultado de una desesperanza social y laboral, cometida por personas que provienen de las franjas más desfavorecidas de la población. En estas comunidades, la falta de educación, de formación profesional, de perspectivas, es decir de futuro, es un motor muy potente de la comisión de actos delictivos o criminales. No se trata de minimizar la gravedad de estos actos ni de sus tremendos impactos en la comunidad. Sí se puede, sin embargo, cuestionar la pertinencia de políticas puramente represivas frente a personas que no tienen “nada que

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el coste de las medidas represivas y del crimen va desde el 2,52 por ciento del PIB de Costa Rica hasta el 10,54 por ciento en Honduras, pasando por el 3,32 en Chile, el 8,70 en Paraguay y el 3 por ciento en Uruguay.

Tratar de abarcar las causas profundas de los fenómenos violentos constituye una base de las políticas de prevención de la violencia. En materia de seguridad ciudadana, dichas políticas forman un pendiente esencial de las políticas represivas y aseguran un equilibrio de procesos para la reducción de la inseguridad. Al abarcar las causas sociales en las que radica buena parte de la violencia, la prevención de la violencia pretende ofrecer una respuesta amplia a un fenómeno complejo. Esencialmente, la prevención de la violencia tiene un enfoque interinstitucional pero seguramente sigue, en muchos países, demasiado vinculada a instituciones del sector de la seguridad o de la justicia cuando los actores más fundamentales de esta política pertenecen a los sectores sociales. En efecto, la capacidad de ofrecer educación y formación, empleo a largo plazo y perspectivas a jóvenes desocupados es, sin duda, uno de los mejores medios para limitar la violencia.

JustyS.

La revista de Justicia
y Seguridad Ciudadana
de EUROsociAL II





Publicaciones

En este espacio se presentan algunas de las publicaciones realizadas en las áreas Justicia y Seguridad Ciudadana



Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad (2013)

La Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad y su Memoria explicativa fueron aprobadas en la ciudad de La Antigua, Guatemala, en junio del 2013. El trabajo se realizó tomando en cuenta los objetivos del Plan Estratégico para la Implementación de las 100 Reglas de Brasilia, el Eje II del Plan Estratégico de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 2012-2014 y las resoluciones 2714, 2656 y 2801

de la Asamblea General de la OEA. La adopción de la Guía Regional y su Memoria Explicativa por parte del AIDEF constituye la estandarización de los parámetros mínimos que cada Defensoría Pública estará exigiendo respecto a los derechos de los/las privados/as de libertad en cada uno de los países. Además, se trata de una política pública regional de las Defensorías que impactará positivamente a los/las privados/as de libertad.



Mecanismos de coordinación institucional en materia de violencia de género (2014)

El presente mecanismo de coordinación institucional es un modelo de cooperación formal para las instituciones que a nivel nacional tienen competencias en materia de atención y protección de las víctimas de violencia de género y debe tener una doble virtualidad:

- Promover el intercambio de información

en el procedimiento judicial y en la derivación y atención con el resto de servicios incluidos en la ruta de protección a la víctima de violencia.

- Asegurar el cumplimiento de los protocolos y por tanto mejorar la eficacia de la investigación de los delitos y de atención a las víctimas



Reglas regionales para la inserción socio-laboral de las personas privadas de libertad y liberadas (2015)

Esta publicación se enmarca en la acción de EUROsociAL de inserción socio-laboral de personas privadas de libertad y recoge aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de las políticas de inserción, recordando, a su vez, que forman parte de las obligaciones que la mayor parte de los Estados ha asumido al firmar acuerdos de adhesión a las normas internacionales, tales como las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, aprobadas por Naciones Unidas, los “Principios básicos para el tratamiento

de los reclusos”, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes y el “Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier tipo de detención o prisión”, según lo cual se formulan las siguientes reglas para el desarrollo de programas de inserción socio-laboral.



Modelo regional de política integral para la prevención de la violencia y del delito (2015)

Este Modelo toma como referencia, experiencias de países latinoamericanos y europeos adaptadas al contexto de la región latinoamericana con el fin de propiciar la adopción de un esquema regional de prevención de la violencia y el delito, mediante un enfoque integral que ayude a configurar, fortalecer y consolidar los esfuerzos de los Estados en la elaboración, implementación y evaluación de

las políticas de seguridad y prevención de la violencia y el delito. El Modelo reconoce y se construye sobre la base de que en la región de América Latina existen una serie de esfuerzos y avances significativos en la confirmación y consolidación de políticas integrales de prevención, así como desafíos impostergables a ser considerados por los países para prevenir, reducir y controlar la violencia y el delito.



Conociendo nuestros deberes y derechos - Materiales de orientación para comuneros nativos y comunidades nativas (2015)

Este documento es un Material de Orientación Legal dirigido a las personas integrantes de comunidades nativas que se encuentran involucradas en algún conflicto o que requieran información para plantear alguna queja, demanda o denuncia en el futuro. Fue diseñado para que lo lean todos los comuneros nativos, inclusive los niños, niñas

y adolescentes si fuese posible, a fin que tengan una guía sobre sus derechos, deberes y responsabilidades; y asimismo sobre la forma en que pueden acceder al sistema de justicia del Estado, cuando lo necesiten. Además puede ser utilizado como material de apoyo cuando se realicen capacitaciones sobre derechos de los pueblos indígenas.



Prácticas eficaces en materia de reducción de la reincidencia y de la reinserción social de los reclusos, en particular desde la perspectiva del trabajo remunerado (2014)

Desde sus inicios, el programa EUROsociAL promueve la formulación de nuevas políticas públicas, la introducción de innovaciones en el marco de las políticas y el refuerzo de la capacidad institucional de las administraciones públicas que se encargan de la aplicación de estas políticas. En este contexto, se ha definido un proyecto más específico centrado en la reducción de la reincidencia y en la reinserción social de las personas privadas de libertad. Con este documento se

busca apoyar las políticas y planes nacionales que intentan desarrollar el papel resocializador de la pena, en particular mediante el trabajo retribuido de los condenados, y mediante su reinserción socio-profesional, una vez concluido el período de detención. Esta perspectiva cuestiona de entrada las estadísticas de encarcelamiento en Iberoamérica, así como el sentido que se atribuye a la sanción penal.



Acceso a la Justicia y mecanismos alternos de solución de conflictos para los pueblos indígenas y afrohondureños (2015)

El mapeo y la Guía que recoge este documento, supone un primer esfuerzo de recopilación de las prácticas ancestrales que los pueblos indígenas mantienen hoy, con mayor o menor intensidad, como instrumentos efectivos para la resolución de los conflictos que se producen en su seno. Prácticas que, desde la perspectiva del Plan Estratégico de los MASC, deben reconocerse como efectivos medios de resolución de conflictos y que deben ser tomados en cuenta dentro de las políticas públicas del Estado

hondureño para la accesibilidad a la justicia de esos colectivos. Este mapeo también permite conocer e identificar las diferentes comunidades, las autoridades que intervienen en la solución de las disputas entre miembros de las comunidades y tribus, su ubicación en la estructura ancestral de organización de los pueblos, los procedimientos que utilizan, las sanciones que se imponen, así como los casos más comunes que se resuelven mediante esos mecanismos.

Todas las publicaciones del programa pueden ser consultadas y descargadas a través de la página web del programa EUROsociAL II : www.eurosoci-al-ii.eu/es/biblioteca

JustyS.



Socio Coordinador



Socios Operativos

